



Medellín, once (11) de mayo dos mil veintitrés (2023)

REFERENCIA: RECURSO DE APELACIÓN- EJECUTIVO LABORAL
EJECUTANTE: JUAN DIEGO SÁNCHEZ ARBELÁEZ
EJECUTADO: MARÍA LUCÍA CUERVO ARROYABE
PROCEDENCIA: JUZGADO DOCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
RADICADO: 05001-31-05-012-2021-00355-01

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, procede a decidir el RECURSO DE APELACIÓN, interpuesto por el ejecutante, contra el auto del 30 de junio de 2022, dictado por el JUZGADO DOCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, mediante el cual se denegó el mandamiento de pago, en el proceso ejecutivo laboral instaurado por JUAN DIEGO SÁNCHEZ ARBELÁEZ contra la señora MARÍA LUCIA CUERVO ARROYABE.

El presente asunto fue debidamente discutido por los miembros integrantes de la Sala, acogándose el proyecto de providencia presentado por el Magistrado Ponente FRANCISCO ARANGO TORRES, consignado en los siguientes términos:

ANTECEDENTES:

El ejecutante, quien actúa en causa propia, pretende con la presente acción judicial, que se declare que prestó sus servicios profesionales de abogado a la demanda MARÍA LUCÍA CUERVO ARROYAVE, en el proceso que se adelantó contra COLPENSIONES, y como consecuencia se les condene a pagar la suma de \$18.800.000, a partir del 25 de septiembre de 2019, por concepto de honorarios profesionales adeudados, intereses de mora y costas procesales causadas en este proceso.

Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, relata el actor que suscribió contrato, de prestación de servicios con la señora María Lucía Cuervo Arroyabe, el día 04 de agosto de 2014, con el fin de interponer y llevar a término proceso ordinario laboral de doble instancia en contra de Colpensiones, para que se reconociera y pagara a la

señora María Lucía Cuervo Arroyabe pensión de sobreviviente por el fallecimiento del señor Heriberto de Jesús Restrepo Sánchez, retroactivo pensional, intereses moratorios y costas del proceso.

Aduce que el mencionado proceso judicial fue conocido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, bajo el radicado N° 2014-01627, profiriéndose sentencia de primera instancia el 01 de abril de 2016, por medio de la cual se condenó a Colpensiones a reconocer en favor de la señora María Lucía Cuervo Arroyabe, sustitución de pensión del causante Heriberto de Jesús Restrepo Sánchez, retroactivo pensional desde el 24 de julio de 2011 hasta el último día de marzo del año 2016 por un valor de \$ 39'377.738.5. Adicionalmente, se condenó a la demandada a reconocer y pagar a favor de la señora María Lucía Cuervo Arroyabe, intereses moratorios a partir del 29 de noviembre de 2011 hasta la fecha del pago efectivo de la prestación económica y, se le condenó al pago de costas procesales por un valor de \$3.937.7346.

Relata que mediante fallo del 27 de febrero de 2018 el Tribunal Superior de Medellín - Sala Laboral modificó la anterior decisión y en su lugar ordenó el pago del retroactivo pensional desde el 24 de julio de 2011 hasta el 28 de febrero de 2018, por un valor de \$ 58.731.197, se modificó la fecha de causación de los intereses moratorios, indicando como fecha en la cual estos se hacían exigibles el 30 de enero de 2012 y confirmó en lo demás.

Indica que el 17 de abril de 2018, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación frente al auto del 12 de abril de 2018 que liquidó las costas, modificándose las mismas, emitiendo el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín el auto del 12 de octubre de 2018 por medio del cual se aprobó liquidación de costas por valor de \$ 6.281.460.

Indica que luego de ejecutoriada la sentencia, Colpensiones emitió la resolución SUB 203628 del 31 de julio de 2019, reconociendo la pensión de sobreviviente a la señora María Lucía Cuervo Arroyabe, incluyéndola en nómina de pensionados y ordenó el pago de \$136'075.574 por concepto de mesadas adeudadas, retroactivo pensional e intereses de mora, razón por la cual el día 25 de septiembre de 2019, se le presentó cuenta de cobro a la señora María Lucía Cuervo Arroyabe, por los honorarios pactados dentro del contrato de prestación de servicios suscrito, por un 30% de los resultados obtenidos, menos un descuento otorgado, por lo que el total en el caso en concreto ascienden a la suma de \$38.800.000.

Anota que la señora María Lucia Cuervo Arroyabe procedió el 26 de septiembre de 2019, a realizarle una consignación a su cuenta por valor de \$20.000.000, y ante la falta de pago del valor completo de los honorarios se le ha reiterado a la citada señora Cuervo para que realice el pago de los honorarios restantes, por lo cual se acude a la justicia laboral ordinaria con la presentación de demanda ejecutiva, para que se libre mandamiento de pago por la suma adeudadas.

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante providencia del 30 de junio de 2022 (archivo "07.NiegaMandamientodePago" del expediente digitalizado), el JUZGADO DOCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN denegó el mandamiento de pago deprecado por JUAN DIEGO SÁNCHEZ ARBELÁEZ en contra de MARÍA LUCÍA CUERVO ARROYABE, indicando que el título respecto del cual se invoca prestar mérito ejecutivo, no presta el mérito pretendido, puesto que la parte ejecutante fundamenta sus pretensiones en la actuación profesional surtida dentro de un proceso ordinario laboral y en un contrato de prestación de servicios donde afirma se pactó entre las partes el valor de los servicios a prestar, con lo que se considera no se constituye un título ejecutivo por ausencia de los elementos esenciales que permita hacer el cobro de la obligación.

Señaló el *a quo*, que, la prestación del servicio por parte de quien promueve esta ejecución por sí mismo no se constituye en plena prueba contra el deudor, ni declara o manifiesta el alcance de la obligación a cobrar, ya que en este caso determinarlo implica acudir a otros medios distintos de la mera observación, no pudiendo entenderse como un derecho declarado, cierto e indiscutible que pueda reclamarse por la vía ejecutiva, ya que si bien pudo surgir una obligación contractual, no es patente que se le adeuden los valores reclamados, implicando la prueba documental, su valoración probatoria para determinar los términos de la obligación contraída, lo que conlleva a que el asunto deba desatarse en la vía ordinaria dispuesta para este tipo de conflictos ya que hay duda en la existencia de la acreencia y por ende se torna en inexigible.

DE LOS RECURSO DE APELACIÓN:

El ejecutante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación (archivo "8.Recurso" del expediente digitalizado), solicitando revocar la decisión del *a quo*, y en su lugar librar mandamiento de pago a su favor y en contra de la señora MARÍA LUCÍA CUERVO ARROYABE.

Expone que frente al requisitos que debe contener el título base de la ejecución que se pretende y la interpretación que de esto hizo este juzgador debe decirse que, de los documentos aportados con el escrito de demanda no cabe duda de que la ejecutada suscribió contrato de prestación de servicios profesionales con Juan Diego Sánchez Arbeláez el día 04 de agosto de 2014 y que dicho contrato tuvo como objeto de tramitar y llevar a término proceso ordinario laboral de doble instancia en contra de Colpensiones, para que se reconociera y pagara a la señora María Lucía Cuervo Arroyabe pensión de sobreviviente.

Adicionalmente, tampoco existe duda alguna frente a la prestación de servicios como profesional de derecho y que el objeto de dicho contrato se llevó a cabo de manera satisfactoria, tanto es así que, es evidente la intervención como apoderado de la señora María Lucía Cuervo Arroyabe durante todo el curso del proceso ordinario y administrativo que devino en que mediante la resolución SUB 203628 del 31 de julio de 2019, se reconociera pensión de sobreviviente a la ejecutada, incluyéndola en nómina de pensionados y en ese sentido se le ordenó pagar el valor de \$ 136.075.574 por concepto de mesadas adeudadas, retroactivo pensional e intereses de mora.

Ahora bien, en este sentido es claro que de lo anterior surgió la obligación para el extremo pasivo del presente proceso de cumplir lo establecido en la cláusula segunda del contrato de prestación de servicios que dio origen a la relación contractual, por lo que debía cancelar a mi nombre la suma de \$ 38.800.000. Sin embargo, tal cómo se evidencia por medio del recibo de caja No. 151, la demandada únicamente canceló la suma de \$20.000.000, quedando un saldo insoluto a mi favor por un valor que asciende a la suma de \$18.800.000

Así que del conjunto de documentos aportados se tiene que la obligación de la cual se pretende su ejecución está contenida en ellos de manera clara y no existe duda frente a las partes y el crédito que originó el presente proceso, adicionalmente, su mención en el recibo de caja N° 151, que hace parte de los documentos cuya unidad jurídica conforman el título ejecutivo, es expresa y no permite interpretación diferente de la que la ejecutada aún adeuda la suma que se menciona y que se consigna de manera expresa dentro del documentos conjunto.

Por lo anterior, los documentos que fundamentan la presente demanda ejecutiva se sustrae que cumplen con los requisitos de claridad, exigibilidad y es expresa la obligación de la cual se depreca se libre mandamiento de pago a su favor, por lo que solicita que se reponga la decisión, o en su lugar se conceda el recurso de apelación.

El *a quo*, no dio trámite al recurso de reposición por haber sido presentado extemporáneamente, concediendo el recurso de apelación.

DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, el ejecutante no allegó escrito de alegaciones.

Por ser competente esta superioridad, para conocer del recurso de apelación contra el auto que decide sobre el mandamiento de pago conforme al Nral 8 del Art. 65 del CPTSS se procede a resolver el mismo, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

La Sala se ocupará del estudio el recurso de apelación, con apego al imperativo contenido en el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual: *“La sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”*.

En la forma en que quedó sustentado el recurso de apelación, se analizará si los documentos base de ejecución, esto es el contrato de prestación de servicios y el recibo de caja No. 151, que hace parte de la unidad jurídica que conforma el pretendido título ejecutivo, satisfacen las exigencias de ley (artículo 100 del C. P. T. y de la S.S. y 422 del C.G. del P.)

Para resolver la controversia, es preciso manifestar que en el Código Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social estableció en el Artículo 100, para que sea procedente la ejecución de una obligación originada en una relación de trabajo y por extensión a la seguridad social en virtud de la competencia del juez laboral, que conste en un documento proveniente del deudor o su causante, o que provenga de un decisión judicial o arbitral en firme. Así lo consagra la referida norma:

“ARTÍCULO 100. PROCEDENCIA DE LA EJECUCIÓN. Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme...”.

Para que la obligación pueda ser reclamada ejecutivamente, debe ser clara, expresa y exigible, según lo dispuesto en el Artículo 422 del Código General del Proceso, el

cual es de plena aplicación en materia laboral en virtud de la aplicación analógica del CGP que establece el Art. 145 de CPT y la SS, norma que en su tenor literal expresa:

“ARTÍCULO 422. TÍTULOS EJECUTIVOS. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley ...”

Según la inteligencia de los anteriores preceptos, la obligación debe constar en documento que provenga del deudor o de su causante y debe ser expresa, clara y exigible.

Tales exigencias son aplicables para todo tipo de ejecución en la que se pretenda hacer efectiva una obligación bien sea de dar, hacer o no hacer; y si además, se trata de una obligación dineraria, se requiere que esta sea líquida, es decir, que este *“expresada en una cifra numérica precisa o que sea liquidable por simple operación aritmética, sin estar sujeta a deducciones indeterminadas”*, tal como lo dispone el inciso final del Artículo 424 del Código General del Proceso.

Al respecto, la Jurisprudencia ha señalado que los títulos ejecutivos deben gozar de ciertas condiciones formales y sustantivas esenciales. Las formales consisten en que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación sean auténticos y emanen del deudor o de su causante. Las condiciones sustanciales se traducen en que las obligaciones que se acrediten a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o del causante, sean claras, expresas y exigibles.¹

Una obligación es **Expresa**, cuando esta inequívocamente determinable o determinada en el documento. Es **Clara**, cuando consta su elemento subjetivo del acreedor y deudor, así como el objeto de la prestación debida, perfectamente individualizada y es **Exigible**, cuando no está sometida a plazo o condición.

Debe indicarse además que el título ejecutivo puede ser singular, esto es, estar contenido o constituido en un solo documento, ó bien puede ser complejo, definido este por la doctrina como “la obligación se deduce del contenido de dos o más documentos dependientes o conexos. En este caso el título ejecutivo de la unidad jurídica del título, al ser integrado éste por una pluralidad de documentos ligados

¹ Consejo de Estado. Auto 4 de mayo de 2000, expediente N° 15679, ejecutante: Terminal de Transporte de Medellín S. A

íntimamente²”, como por ejemplo, entre otros, por un contrato, más las constancias de cumplimiento del servicio contratado, de acuerdo con ello, los documentos allegados con la demanda deben valorarse en su conjunto, con miras a establecer si constituyen una prueba idónea de la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a favor del ejecutante, como lo establece el artículo 422 del C.G.P. El título ejecutivo debe demostrar la existencia de una prestación en beneficio de una persona. Es decir, que el obligado debe observar, en favor de su acreedor, una conducta de hacer, de dar o de no hacer y esa obligación debe ser expresa, clara y exigible, requisitos estos que ha de reunir cualquier título ejecutivo, no importa su origen.

En cuanto al pago de honorarios profesionales, cuyo origen provenga de un contrato de prestación de servicios profesionales, a través de procesos ejecutivos la sentencia con Radicación 44401-23-31-000-2007-00067-01(34201) del 31 de enero de 2008, Consejera Ponente Myriam Guerrero De Escobar, el Consejo de Estado, señaló lo siguiente:

“En los casos en los cuales se pretende el pago de una suma de dinero, por concepto de honorarios profesionales cuya fuente es un contrato de prestación de servicios, se requiere acreditar cuáles fueron las obligaciones que asumieron las partes contratantes y si las mismas fueron o no satisfechas conforme lo pactado en la relación negocial, para lo cual resulta ineludible acudir al contrato. Pero además, en los casos en los cuales dicho pago quedó condicionado al resultado favorable o exitoso de la gestión encomendada, resulta menester acreditar que ésta se satisfizo tal como lo acordaron las partes, de manera que no exista duda alguna de que los honorarios devengados corresponden a la gestión realizada satisfactoriamente por el mandatario, según lo acordado”.

Descendiendo al caso en estudio, encontramos que el ejecutante allegó como título el contrato de prestación de servicios profesionales, en el cual se estableció en la cláusula segunda que los honorarios se tasaban, en los siguientes términos **“...Se pacta entre las partes que del producto del resultado favorable del proceso, EL MANDANTE pagará al MANDATARIO el 30% más las costas y/o agencias en derecho...”**

Y tratándose este ejecutivo de los denominados complejos o compuestos, el abogado además del contrato de prestaciones sociales citado, anexo a folio 30 la cuenta de cobro del 25 de septiembre de 2019 dirigida a la señora MARÍA LUCÉLIA CUERVO, cobrándole como honorarios por los servicios prestados la suma de **\$38.800.000**; acto seguido se anexa el recibo de caja No.104 con el citado valor adeudado y el recibo de caja No.105 con el valor abonado y el presunto faltante por pagar.

² Los Procesos Ejecutivos. Juan Guillermo Velásquez Gómez, Octava Ed. 1995, Pag 45. Ed. Biblioteca Jurídica Diké.

En los documentos relacionados no se halla una obligación, clara expresa y exigible, pues encuentra esta colegiatura que el valor cobrado a la señora María Lucía Cuervo Arroyabe, al parecer no corresponde al citado 30% del producto del resultado favorable, pues de la resolución SUB 203628 del 31 de julio de 2019, anexa en la demandada ejecutivo en los folios 24 a 29, se resuelve que se le cancela a la ejecutada la suma \$136.075.574, así que el supuesto 30% sería \$40'822.672, valor que no corresponde al reclamo en este proceso ejecutivo, además de que el ejecutante en el hecho 10 de su demandada, afirma lo siguiente “...le cobraba a la ejecutada el 30% de los resultados obtenidos, **menos un descuento otorgado**, por lo que el total en el caso en concreto ascienden a la suma de \$ 38.800.000...” sin que haya documento en el que claramente se exprese cuál fue el descuento otorgado por el demandante o convenido por las partes (subrayado propio de la sala).

Pero, es más, el demandante no acredita que Producto de su gestión para la que fue contratado, se obtuvo el pago que realizó COLPENSIONES a la demandada mediante la resolución SUB 203628 del 31 de julio de 2019, en el valor de \$ 136.075.574 por concepto de mesadas adeudadas, retroactivo pensional e intereses de mora, pues ni se aporta prueba de que la gestión judicial que desembocó en la expedición de la referida Resolución haya sido gestionada por él, y aunque se pudiera colegir que sí lo fue en razón al pago de los de \$20.000.000, que realizó la ejecutada, en los procesos ejecutivos no es factible realizar este tipo de inferencias, pue la obligación tiene que ser clara y expresa, por lo que el actor debía aportar las decisiones judiciales en firme que producto de su gestión llevaron a su cumplimiento mediante la resolución SUB 203628 del 31 de julio de 2019.

Ahora, en la cláusula segunda se pactó que los honorarios se tasaban, en los siguientes términos “...**Se pacta entre las partes que del producto del resultado favorable del proceso, EL MANDANTE pagará al MANDATARIO el 30% más las costas y/o agencias en derecho...**” sin que se haya precisado qué compone “el producto del resultado favorable del proceso” ni la fecha o momento que se debe realizar el pago.

Así, encuentra esta colegiatura que de los documentos que integran el pretendido título ejecutivo complejo, no dan cuenta de una cifra numérica precisa **o que su liquidación se obtenga por simple operación aritmética, como lo dispone el citado** inciso final del Artículo 424 del Código General del Proceso, pues de una simple operación matemática no es factible determinar el valor supuestamente adeudado al ejecutante.

Así que contrario a lo que plantea el recurrente, no porque un documento diga que presta mérito ejecutivo, satisface los condicionamientos que en tal sentido exige la ley, dado que en este caso aún existen muchos factores por establecer, dudas por las cuales NO se está ante una obligación clara, expresa y exigible en los términos del artículo 422 del C.G.P., toda vez que la claridad de la obligación, está determinada por el entendimiento que acreedor y deudor tienen de las prestaciones que se deben, es decir, que exista una sola operación lógica y una sola consecuencia a la operación cognitiva, que permita establecer a las partes, sin racionamientos extensos, el alcance de la obligación, la prestación (de hacer o dar), lo que se debe, desde cuándo se debe, el monto de lo que se debe, o que sea claramente deducible, lo que consecuentemente impide que dicha obligación pueda hacerse efectiva mediante un proceso ejecutivo, por lo que se requiere la mediación de un proceso ordinario declarativo de regulación de honorarios.

Recuérdese que, en los procesos de ejecución, no puede existir discusión alguna acerca de la pretensión, pues el derecho se debe encontrar expresamente reconocido, y existir la certeza que emane del documento, lo que debe constituir plena prueba del derecho a favor del ejecutante y en contra del demandado. El juez en el proceso ejecutivo no declara cuál de las partes tiene razón, pues se trata de una prestación nítida, bien determinada, y exigible. El derecho está allí inserto, creado y reconocido por el deudor, pero que está insatisfecho, impagado, no cubierto, pues el deudor no lo ha cumplido. En todo proceso ejecutivo se requiere para su iniciación de un título ejecutivo que, aun siendo de origen privado, tenga tanta fuerza de convicción y certeza.

En virtud de lo anterior, es dable concluir, que el título presentado como base del recaudo no presta mérito ejecutivo al no contener una obligación expresa en los términos de la normatividad antes citada, razón por la cual se confirmará la decisión primigenia.

Sin costas en esta instancia al no haberse causado.

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto apelado del 30 de junio de 2022, proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ejecutivo promovido por JUAN DIEGO SÁNCHEZ ARBELÁEZ, en contra de la señora MARÍA LUCÍA

CUERVO ARROYABE.

Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**.

Devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

Se firma en constancia por los que intervinieron en la decisión.

Los Magistrados,

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados
N ° **080** del **12 DE MAYO DE 2023**.

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>



SALVAMENTO DE VOTO
MAGISTRADO JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ
Medellín, once (11) de mayo de 2023

REFERENCIA: EJECUTIVO LABORAL
EJECUTANTE: JUAN DIEGO SÁNCHEZ ARBELÁEZ
EJECUTADO: MARÍA LUCÍA CUERVO ARROYABE
RADICADO: 05001 31 05 012 2021 00355 01

Con el debido respeto, me aparto de la decisión de la Sala mayoritaria, de CONFIRMAR el auto apelado del 30 de junio de 2022, por medio del cual se denegó el mandamiento de pago en el proceso ejecutivo laboral instaurado por JUAN DIEGO SÁNCHEZ ARBELÁEZ contra la señora MARÍA LUCIA CUERVO ARROYABE.

RAZONES DEL DISENSO

A pesar de los argumentos que se indican en la decisión mayoritaria para concluir que el título presentado como base del recaudo no presta mérito ejecutivo al no contener una obligación expresa, clara y exigible en los términos de artículo 422 del C.G.P., considero que, en este caso le asiste razón a la parte ejecutante, por los siguientes argumentos:

1.- El proceso ejecutivo parte de que exista certeza sobre el derecho reclamado, el cual debe estar contenido en un título que preste mérito ejecutivo, que debe cumplir unas condiciones esenciales, a saber: **a)** que haga prueba por sí mismo sin necesidad de complementarlo con algún reconocimiento, cotejo o autenticación; **b)** que mediante el mismo se pruebe la existencia de una obligación patrimonial determinada, líquida, lícita y exigible en el momento en que se inicia el juicio; y **c)** que ofrezca plena certeza frente a la titularidad del crédito – acreedor- y ante quien puede ser exigido – deudor-.

2.- En el caso de autos, la obligación que pretende cobrar el ejecutante está acreditada en un título ejecutivo complejo, conformado por un contrato por prestación de servicios, la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín el 1º de abril de 2016, la sentencia dictada por la Sala Sexta de Decisión Laboral de este Tribunal el 27 de febrero de 2018, la resolución SUB 203628 del 31 de julio de 2019 de COLPENSIONES, por medio del cual da cumplimiento a las sentencias mencionadas, ordenando el pago de \$136.075.574 por concepto de las mesadas adeudadas. Nótese que en la resolución se hace referencia, detallada, de todos los conceptos que se están pagando, esto es, las mesadas causadas hasta el 30 de julio de 2019.

Que se procede a reconocer una pensión de sobrevivientes con ocasión al fallecimiento del señor **RESTREPO SANCHEZ HERIBERTO DE JESUS**, quien en vida se identificó con CC No. 3.427.105, a favor:

- a) **CUERVO ARROYAVE MARIA LUCIA** identificado(a) con C.C. No. 39,162,597, fecha de nacimiento 19 de noviembre de 1952, en calidad de Compañera(o) con un porcentaje de 100%.

• El retroactivo estará comprendido por:

- a. Pagos ordenados Sentencia por concepto de mesadas de la pensión de sobrevivientes por valor de **\$58,731,197.00** desde el 24 de julio de 2011 hasta el 28 de febrero de 2018
- b. Pagos ordenados Sentencia liquidados por COLPENSIONES por concepto de mesadas ordinarias de la pensión de sobrevivientes por valor de **\$13,609,232.00** desde el 01 marzo de 2018 hasta el 30 de julio de 2019.
- c. Pagos ordenados Sentencia liquidados por COLPENSIONES por concepto de mesadas adicionales de la pensión de sobrevivientes por valor de **\$2,390,600.00** desde el 01 marzo de 2018 hasta el 30 de julio de 2019.
- d. Pagos ordenados Sentencia liquidados por COLPENSIONES por concepto de intereses moratorios de la pensión de sobrevivientes por valor de **\$69,122,145.00** calculados sobre el retroactivo reconocido, desde el 30 de enero de 2012 hasta el 30 de julio de 2019.
- e. Que del valor ordenado por Sentencia se descontara la suma de **\$79,300.00**, por concepto de descuentos en salud sobre los dineros girados y no cobrados por concepto de mesadas pensionales causadas entre el 24 de julio de 2011 al 30 de agosto de 2011
- f. Que del valor ordenado por Sentencia se descontara la suma de **\$7,698,300.00**, por concepto de descuentos en salud, causados entre 24 de julio de 2011 hasta el 30 de julio de 2019.

Ahora. En el contrato por prestación de servicios suscrito entre las partes, se desprende claramente la obligación pactada, pues se lee en la cláusula segunda, lo siguiente: *"HONORARIOS. Se pacta entre las partes que del producto del resultado favorable del proceso, EL MANDANTE pagará al MANDATARIO el 30%, más las costas y/o agencias en derecho"*

3.- De la lectura del contrato por prestación de servicios se evidencia que la señora **MARÍA LUCÍA CUERVO ARROYAVE** contrató los servicios

profesionales del abogado JUAN DIEGO SÁNCHEZ ARBELÁEZ para que trámite, a través de un proceso ordinario, la pensión de sobrevivientes e intereses moratorios. Asimismo, de las sentencias mencionadas se desprende que el proceso judicial se resolvió en favor de la señora CUERVO ARROYAVE, reconociéndose en su favor la pretendida pensión e intereses moratorios. Finalmente, la resolución proferida por COLPENSIONES el 31 de julio de 2019, da cuenta que la entidad pagó la obligación a su cargo.

4.- Se tiene pues, que la obligación reclamada es **expresa**, debido a que se pretende el cobro de los honorarios profesionales del producto favorable del proceso, que para el caso concreto se deriva en las mesadas pensionales adeudadas hasta que COLPENSIONES dio cumplimiento a la sentencia, así como a los intereses moratorios; si bien, en el proyecto cuestionado se hace alusión a que el 30% de \$136'075.574 asciende a \$40'822.672, mientras que lo reclamado por la vía ejecutiva es \$38'800.000 *“sin que haya documento en el que claramente se exprese cuál fue el descuento otorgado por el demandante o convenido por las partes”*, lo cierto es que el valor pretendido en este proceso de ejecución es inferior al 30% inicialmente pactado, lo cual no puede servir de argumento para considerar que la obligación no es expresa. Ello se debe a que, el ejecutante es libre de reclamar por esta vía la suma que considere, sin que ello supere la máxima convenida. Son **claros** los conceptos reclamados, pues estos obedecen a las resultas de proceso. Finalmente, la obligación es actualmente **exigible**, toda vez que el proceso judicial finalizó y lo reclamado fue el producto de este, el cual se observa en la resolución proferida por COLPENSIONES.

5.- Es de resaltar que, con el fin de que se libre orden de pago, el ejecutante solamente debe aportar el título ejecutivo que soporta la obligación, lo cual realizó a cabalidad; por su parte, el operador judicial debe examinar el mencionado título para determinar que la obligación reclamada es clara, expresa y exigible, por lo que en esta etapa procesal, no le es dable entonces cuestionar la razón que llevó al actor a reclamar una suma inferior a la que posiblemente debería ser; por último, está en cabeza de la ejecutada cuestionar que lo pretendido e informado por el ejecutante que no se ajuste a la realidad.

6.- Finalmente, no viene al caso que el cumplimiento de lo pactado en el contrato por prestación de servicio deba tramitarse a través de un proceso ordinario declarativo de regulación de honorarios, toda vez que éstos ya se encuentran expresamente pactados.

En los anteriores términos dejo salvado mi voto.

Firmado Por:

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia
Firma Con Salvamento De Voto

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e2d0cd448c504e546c9837d666d6fed9a8ed3722342877e6d8151779c3a90547**

Documento generado en 11/05/2023 03:14:00 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>